

TEMA 10. LEY 39/2015. DE LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA: REVISIÓN DE OFICIO; RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

1. REVISIÓN Y ANULACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: LA REVISIÓN DE OFICIO.

En términos generales, la revisión de un acto administrativo supone la modificación del contenido o de los efectos de un acto preexistente, sin hacer alusión con ello a los motivos **de tal** alteración. Bajo esta rúbrica se englobarán, la revisión de oficio y la que tiene lugar por la vía de recurso, a la que denominaremos revisión rogada. **En el** primer caso, la modificación se introduce por iniciativa del propio órgano que dictó el acto en tanto que en el segundo se lleva **a cabo** a instancia de su eventual destinatario (que normalmente será un particular, aunque también puede serlo otra Administración Pública diferente).

1.1. Revisión de disposiciones y actos nulos

El art. 106 regula esta materia en los siguientes términos:

A) Revisión de actos nulos

Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio **la nulidad de los actos administrativos** que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 (supuestos de nulidad de pleno derecho de los actos).

B) Revisión de disposiciones

Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2 (supuestos de nulidad de los reglamentos).

C) Inadmisión a trámite

El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la **inadmisión a trámite** de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

D) Indemnizaciones, plazo de resolución y efectos

Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de un acto podrán establecer, en la misma resolución por la que se declara esa nulidad, **las indemnizaciones** que proceda reconocer a los interesados, sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de **seis meses** desde su inicio sin dictarse resolución producirá la **caducidad** del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del interesado, se podrá entender la misma desestimada por **silencio** administrativo.

E) Competencia para la revisión de disposiciones y actos nulos y anulables

El art. 111 LPA establece que en el ámbito estatal, de disposiciones y de actos nulos y anulables, **serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y de los actos administrativos nulos y anulables:**

- El **Consejo de Ministros**, respecto de sus propios actos y de los dictados por los Ministros.
- En la Administración General del Estado:
 - Los **Ministros**, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado.
 - Los **Secretarios de Estado**, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes.
- En los Organismos públicos adscritos a la Administración General del Estado:
 - Los órganos a los que estén adscritos los Organismos Públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano de éstos.
 - Los máximos órganos rectores de los Organismos Públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes.

1.2. Declaración de lesividad de actos anulables

Un acto desfavorable o de gravamen, que sea anulable, podrá ser retirado por la Administración de la vida jurídica, sin más.

Ahora bien, si el acto favorece al particular –concesión de una licencia, una beca, adjudicación a una empresa de una obra, etc-, la Administración no puede anularlo por sí misma: debe recurrir ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, impugnando su propio acto, previa declaración de lesividad para los intereses públicos. Los órganos judiciales serán, pues, los únicos competentes para decidir acerca de tal nulidad.

Se encuentra regulada en el art. 107 LPA.

A) Actos afectados

Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público.

B) Plazo máximo para comenzar el procedimiento

La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos **cuatro años** desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.

Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos.

C) Plazo máximo para declarar la lesividad

Transcurrido el plazo de **seis meses** desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

D) Competencia para declararla

Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia.

Si el acto proviniera de las Entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la Entidad.

1.3. Límites de la revisión

“Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes” (art. 110).

Además, *“iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación” (art. 108).*

1.4. Revocación de los actos administrativos y rectificación de errores.

1.4.1. Revocación de actos

La revocación, en sentido estricto, es un cambio unilateral de la voluntad de la Administración, el mal acarrea la extinción de un acto administrativo anterior, válido, pero cuya subsistencia es contraria a los intereses públicos.

La revocación ha encontrado su oposición y límite en la teoría de los derechos adquiridos. Por ello, el art. 109.1 estipula que *“las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico”*.

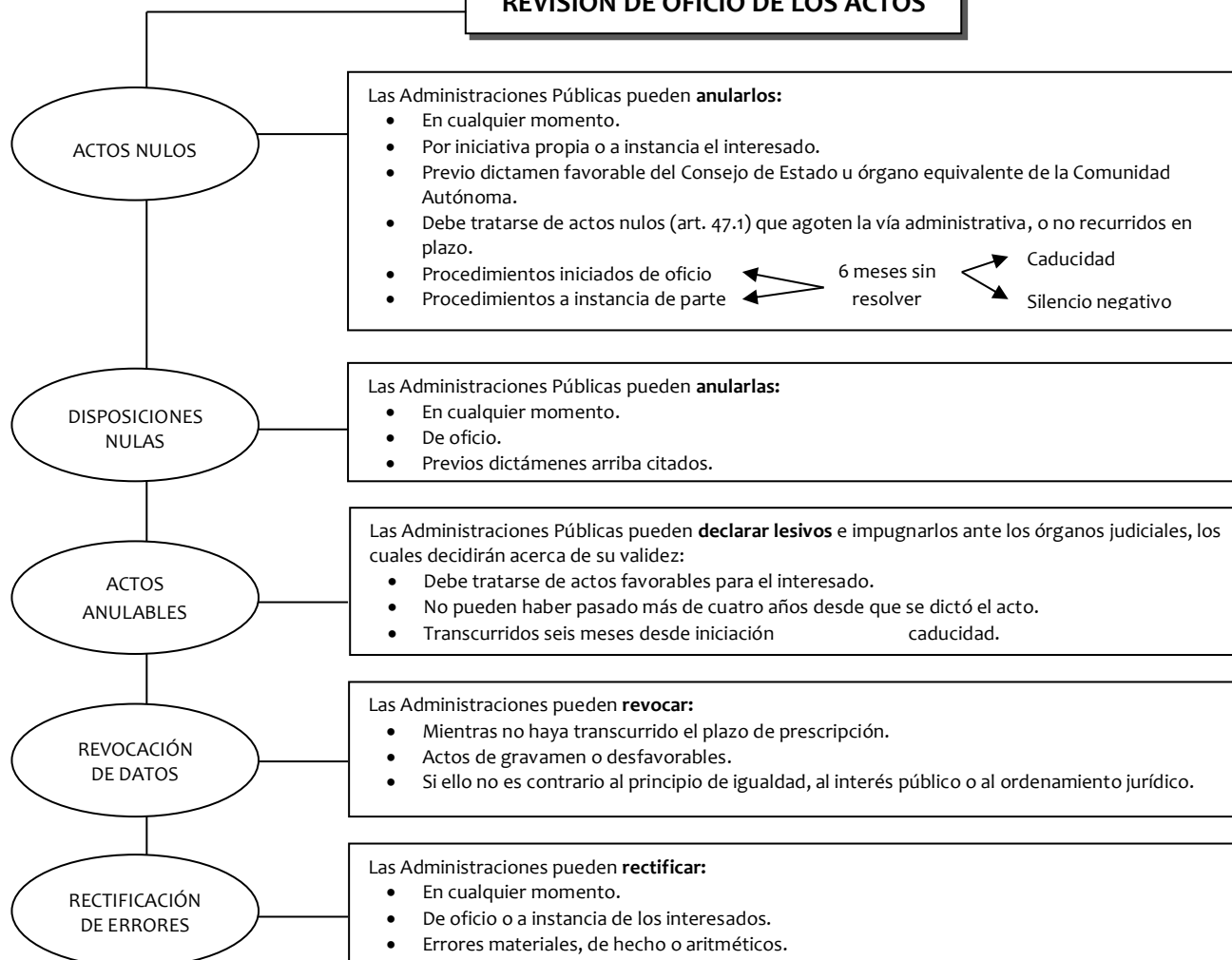
1.4.2. Rectificación de errores

“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos” (art. 109.2).

La pura rectificación material de errores de hecho o aritméticos no implica una revocación del acto en términos jurídicos. El acto materialmente rectificado sigue teniendo el mismo contenido después de la rectificación, cuya única finalidad es eliminar los errores de transcripción o de simple cuenta con el fin de evitar cualquier posible equívoco.

Este carácter estrictamente material, y en absoluto jurídico, de la misma justifica que para llevarla a cabo no se requiera sujetarse a solemnidad ni límite temporal alguno. La rectificación de errores materiales puede hacerse en cualquier momento, tanto de oficio, como a instancia del administrado.

REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS



2. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: CONCEPTO Y CLASES

2.1. Concepto de recurso

Con GARCÍA DE ENTERRÍA podemos definir los recursos administrativos como *“actos del administrado mediante los que éste pide a la propia Administración la revocación o reforma de un acto suyo, o de una disposición de carácter general de rango inferior a la Ley, en base a un título jurídico específico”*.

2.2. Características generales de los recursos administrativos

Para VILLAR PALASÍ y VILLAR EZCURRA, tales características generales comunes a todo tipo de recursos, pueden enumerarse de la siguiente manera:

- a) En los recursos la Administración actúa en régimen de autotutela; por lo tanto, al ser juez y parte, no pueden considerarse propiamente como una forma de control de la actuación administrativa.
- b) No rige en los recursos el principio de congruencia con la misma rigidez que en el ordenamiento procesal, como luego veremos al analizar el art. 119 de la LPA.
- c) La pretensión deducida en el recurso consiste en solicitar la revocación o modificación de un acto definitivo, basado en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
- d) El recurrente ha de tener capacidad de obrar y legitimación en los mismos términos que se estudiaron para el procedimiento administrativo. El órgano decisor del recurso puede ser el mismo que dictó el acto (recursos horizontales), o el superior jerárquico (recursos verticales), u otro diferente (recurso económico-administrativo).
- e) Los plazos para la interposición del recurso son preclusivos, y transcurridos se produce la imposibilidad de proceder a la interposición extemporánea, debido a la doctrina de los actos confirmatorios, o consentidos.

2.3. Significado de los recursos administrativos

La doctrina suele destacar el significado de los recursos administrativos sobre un doble aspecto: como garantía de los particulares y como presupuesto de la impugnación jurisdiccional. Brevemente, los comentamos a continuación.

2.3.1. Los recursos administrativos como garantía

GARCÍA DE ENTERRÍA destaca que los recursos administrativos constituyen una garantía para los administrados en la medida en que a los afectados por las resoluciones definitivas de la Administración les proporciona una garantía, consistente en la posibilidad de reaccionar contra ellas y, eventualmente, de eliminar el perjuicio que comporten. Además es una garantía de carácter universal, puesto que alcanza a toda clase de actos administrativos.

No obstante, esta garantía tiene un alcance limitado por lo que se ha indicado ya sobre que la Administración actúa al resolverlos como juez y parte y sobre que no tienen por finalidad esencial definir el derecho. En suma, aunque los recursos pueden fundarse en cualquier clase de infracción del ordenamiento, no se impide que, junto a los motivos de estricta legalidad, aparezcan de alguna manera razones de simple oportunidad, que puedan ser consideradas por la Administración; de todas formas hay que reconocer, según el mismo autor, que la Administración actúa en vía de recursos mucho más vinculada al Derecho que cuando desarrolla la actividad de gestión.

2.3.2. Los recursos administrativos como presupuesto de la impugnación jurisdiccional

El mismo autor recuerda que la vía administrativa de recurso está configurada tradicionalmente con carácter obligatorio para poder acceder a la vía jurisdiccional que, en definitiva, es la única efectiva. Es decir, resulta preciso agotar la vía administrativa con carácter previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo que, en otro caso, resulta inadmisibile. Conviene indicar aquí que éste es un criterio general que está empezando a sufrir alguna quiebra; así, la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, de 26 de diciembre de 1978, cuando se refería a la protección de tales derechos en el orden contencioso-administrativo, establecía el carácter facultativo del recurso administrativo previo, al igual que la LJCA de 1998.

Precisamente este carácter facultativo de la vía administrativa es una de las demandas de la doctrina, en punto a la necesidad de una revisión del sistema de recursos administrativos. Efectivamente, la obligatoriedad de acudir a la vía administrativa previamente a la contenciosa, el hecho de que el recurso no sirva por sí mismo para frenar la inmediata eficacia de los actos administrativos, y la desorbitada duración que en algunos casos alcanza la vía gubernativa previa hace que, en realidad, los recursos administrativos parezcan establecidos más a favor y privilegio de la Administración que en garantía de los administrados.

2.4. Objeto

2.4.1. Actos susceptibles de recurso administrativo

La LPA dispone en su art. 112.1:

*“Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los **recursos de alzada y potestativo de reposición**, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 47 y 48 de esta Ley.*

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.”

Por su parte el art. 113, establece que:

*“Contra los actos firmes en vía administrativa sólo procederá el **recurso extraordinario de revisión**, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 125.1”.*

Como vemos, la interposición de los distintos recursos dependerá de que las resoluciones pongan fin o no a la vía administrativa, en este sentido establece el art. 114.1:

“Ponen fin a la vía administrativa:

- a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
- b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2.
- c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
- d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
- e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
- f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4.
- g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

Además de lo previsto en el apartado anterior, **en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa** los actos y resoluciones siguientes:

- a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
- b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.
- c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director General o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
- d) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.”

2.4.2. Disposiciones generales y actos administrativos impugnables directamente en sede jurisdiccional

La ley concede el particular otras vías o cauces para obtener la anulación de la disposición u acto por el que se encuentra perjudicado, como es el acceso a los órganos jurisdiccionales en los supuestos en que no caben o han sido ya agotados los recursos administrativos. En este sentido disponen los apartados 3 y 4 del art. 112 de la LPA que:

“3. *Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa.*

Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

4. *Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.”*

2.5. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos

VILLAR PALASÍ y VILLAR EZCURRA, distinguen las fases de preparación, interposición, admisión, instrucción y resolución. A ellos vamos a seguir en la exposición de las líneas generales.

2.5.1. Preparación

Constituye un trámite típicamente procesal, que raramente se presenta en la tipología general de los recursos administrativos. Tiene como finalidad solicitar que se pongan de manifiesto al interesado las actuaciones que integran el expediente administrativo, al objeto de proporcionarle los antecedentes necesarios para la interposición del recurso.

2.5.2. Interposición

El procedimiento se inicia siempre a instancia de parte mediante el escrito de interposición, en el que se hará constar, según el art. 115.1:

- a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.
- b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
- c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
- d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.
- e) Las demás particularidades exigidas en su caso por las disposiciones específicas.

El **error** o la ausencia en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

Los **vicio** y **defectos** que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.

Según el art. 116 LPA, serán **causas de inadmisión** las siguientes:

- a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
- b) Carecer de legitimación el recurrente.
- c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.
- d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.
- e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

2.5.3. Efectos de la interposición del recurso

La interposición del recurso trae como efecto inmediato la **obligatoriedad de resolver**, y ello no sólo por la naturaleza del propio recurso, sino también por el principio establecido en el art. 21 de la LPA. Debemos tener en cuenta también lo establecido en el art. 9.2.c) LRJSP en el sentido de que:

“En ningún caso podrán ser objeto de **delegación** las competencias relativas a:

c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso”.

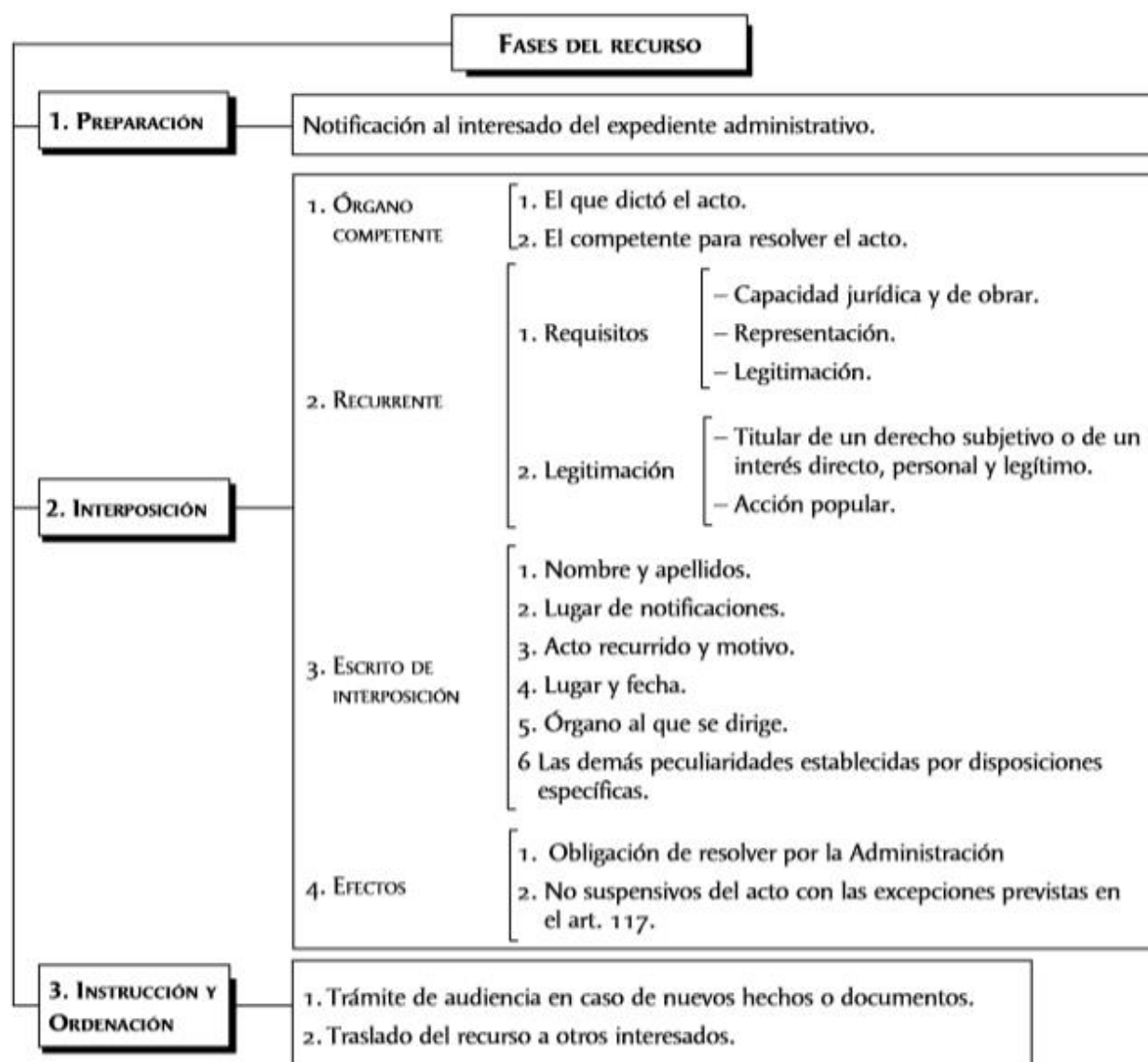
Otro de los efectos o regla general de los recursos es que su interposición **no suspenderá la ejecución** del acto impugnado, no obstante, el art. 117 LPA, que regula la suspensión, establece que:

1. “La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, **no suspenderá** la ejecución del acto impugnado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurren alguna de las siguientes **circunstancias**:
 - a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
 - b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el art. 47.1 de esta Ley.
3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos **un mes** desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos no será de aplicación lo establecido en el art. 21.4, segundo párrafo, de esta Ley.
4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado.

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.

La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiendo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquel se insertó.”



2.5.4. Instrucción y ordenación del procedimiento de recurso

Las normas generales en cuanto a la instrucción y ordenación del procedimiento administrativo son aplicables, en principio, al procedimiento en vía de recurso.

Especial referencia hay que hacer al trámite de audiencia, teniendo en cuenta lo que se dispone, por expresa remisión al mismo, en el art. 118 de la LPA, cuando dice:

1. “Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo **no inferior a diez días ni superior a quince**, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, los hechos documentos o alegaciones del recurrente cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado.

2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, **traslado del recurso** para que en el plazo antes citado aleguen cuanto estimen procedente.
3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán aquéllos que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.”

2.5.5. Resolución del recurso

A) Resolución expresa

La resolución del recurso puede ser, naturalmente, estimatoria o desestimatoria. Así, el art. 119 establece que:

1. “La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimarás las **pretensiones** formuladas en el mismo o declarará **su inadmisión**.
2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones por el órgano competente para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52”.

Además, la terminación del recurso puede tener lugar por las mismas causas que todo procedimiento administrativo, es decir, el desistimiento, la renuncia y la caducidad.

En el procedimiento administrativo el principio de congruencia entre el “petitum” del recurso y la resolución no guarda la misma rigidez que en el ordenamiento procesal. El art. 119.3 dispone a estos efectos:

3. *“El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial” (prohibición de la “reformatio in peius”).*

B) Pluralidad de recursos administrativos

Según el art. 120 LPA, cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.

El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes podrán recurrirlo.

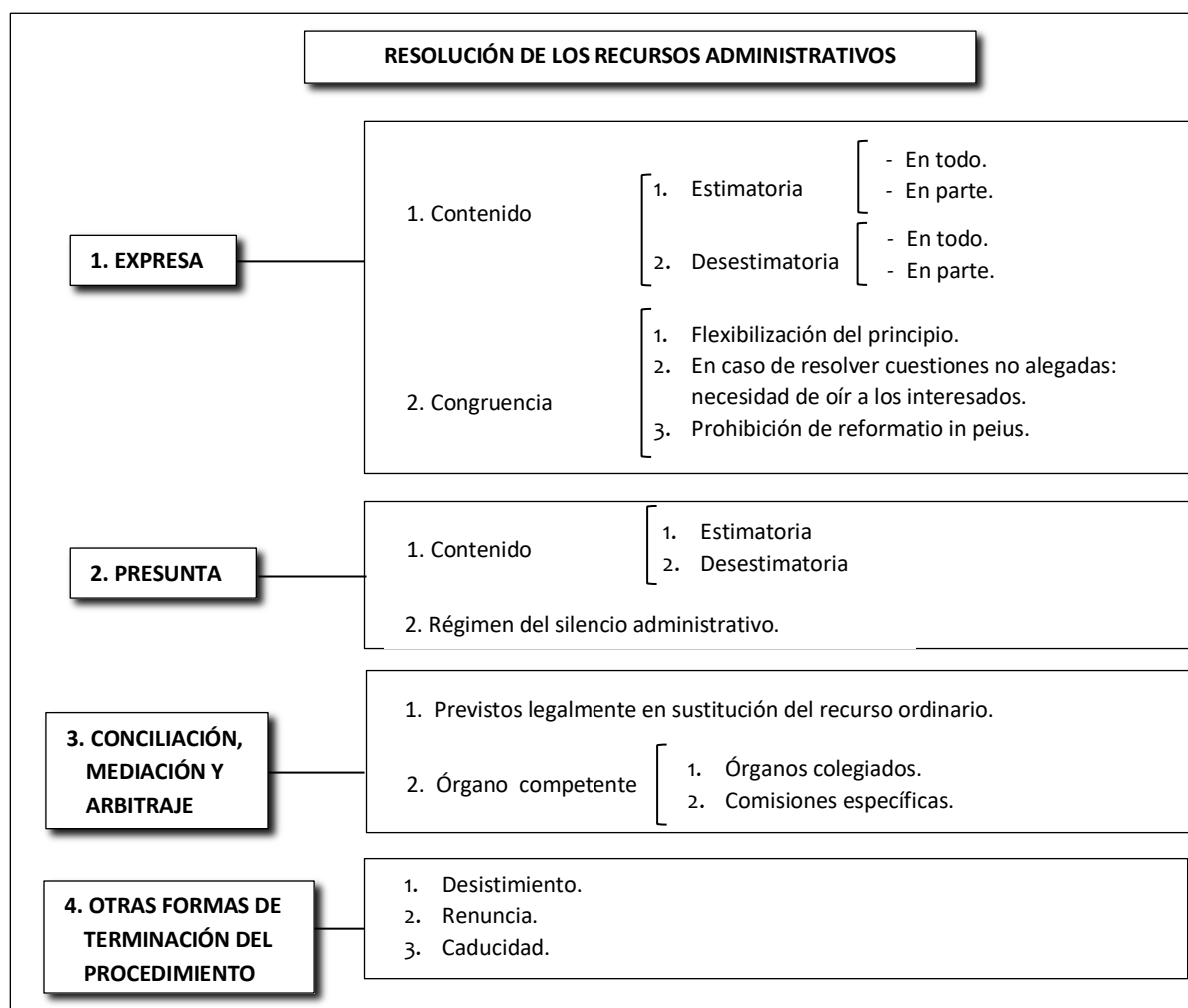
La interposición del correspondiente recurso por un interesado, no afectará a los restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa del mismo acto administrativo

Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando proceda.

C) Resolución por silencio

En el supuesto de que la Administración no resuelva el recurso planteado, a tenor de lo dispuesto en el nuevo art. 24.1, podrá entenderse desestimado el mismo.

Ahora bien, cuando el **recurso de alzada** se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el recurso si llegado el plazo de resolución de este órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo (párrafo 3º del art. 24.1).



2.6. Clases de recursos

Según lo dispuesto en los arts. 121 a 126 LPA, el sistema de recursos que los interesados pueden interponer ante la Administración:

- **Recurso de alzada:** procede, en principio, contra cualquier clase de actos que no pongan fin a la vía administrativa, salvo exclusión legal expresa, y puede fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
- **Recurso potestativo de reposición.**
- **Recurso extraordinario de revisión:** sólo procede en los supuestos concretos expresamente previstos por el legislador y ha de fundarse necesariamente en motivos tasados por la ley.

2.6.1. Recurso de alzada

A) Concepto y regulación legal

Este recurso va a suponer el medio habitual para apurar la vía administrativa, y de llegar a una resolución que, por causar estado en dicha vía, esto es, por llegar al extremo de la línea jerárquica, deje expedita la jurisdiccional contencioso-administrativa.

El recurso de alzada **es un acto del interesado mediante el cual se solicita del órgano superior al que dictó el acto recurrido, la modificación total o parcial del mismo.**

Su regulación aparece en la Sección Segunda del Capítulo II del Título V, que comprende los arts. 121 y 122, que estudiamos a continuación.

B) Objeto e interposición

Aparece en el art. 121 LPA, que establece:

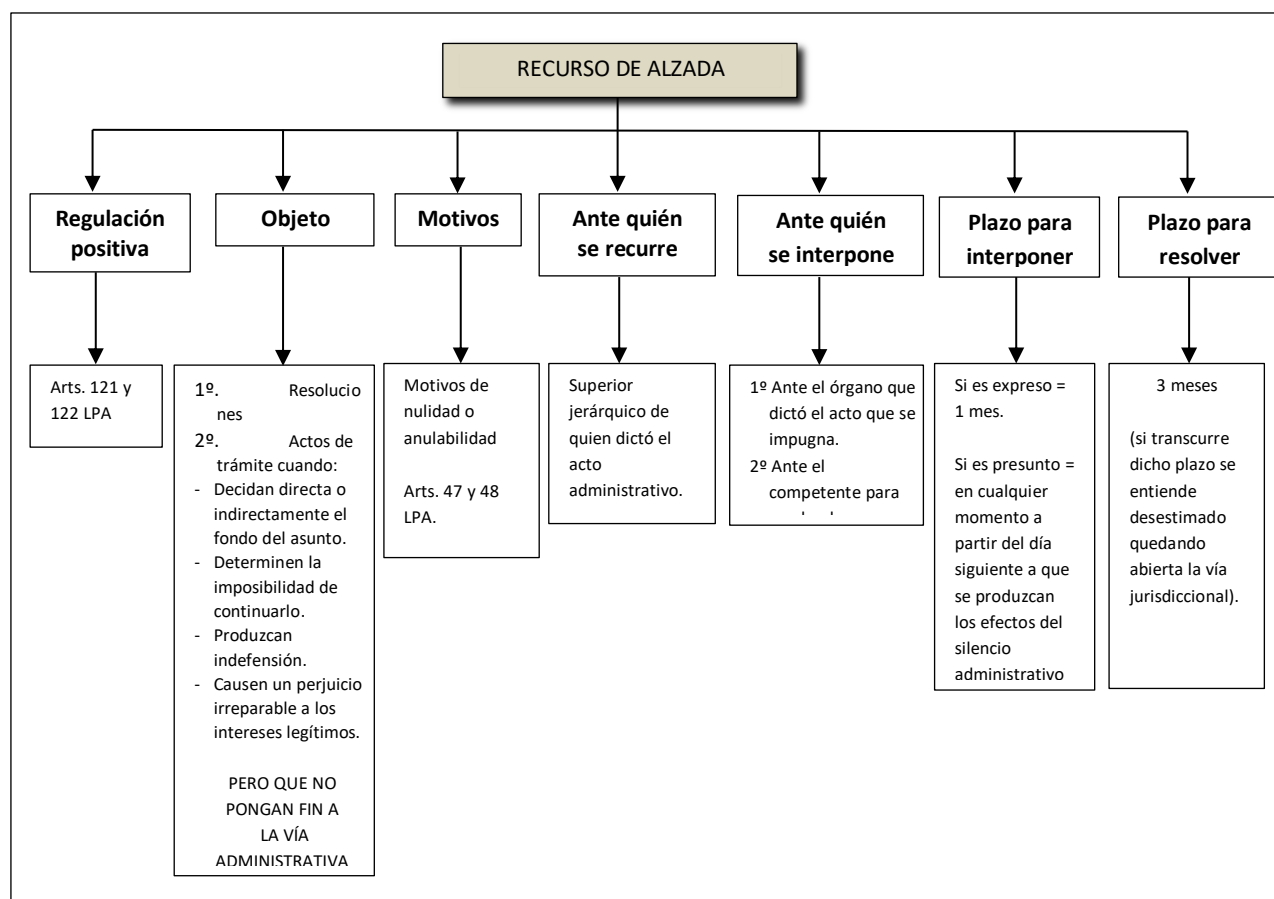
1. *“Las resoluciones y actos a que se refiere el art. 112.1, cuando **no pongan fin a la** vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los citó. A estos efectos, los tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al Presidente de los mismos.*
2. *El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.*
Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior”.

C) Plazos

El art. 122 establece:

1. *“El plazo para la **interposición** del recurso de alzada será de **un mes**, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.*
*Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada **en cualquier momento a partir del día siguiente** a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.*

2. **El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.** Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo.
3. **Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1."**



2.6.2. Recurso potestativo de reposición

A) Regulación legal

Se regula en la Sección Tercera del Capítulo II del Título V de la LPA, que comprende los arts. 123 y 124.

B) Objeto y naturaleza

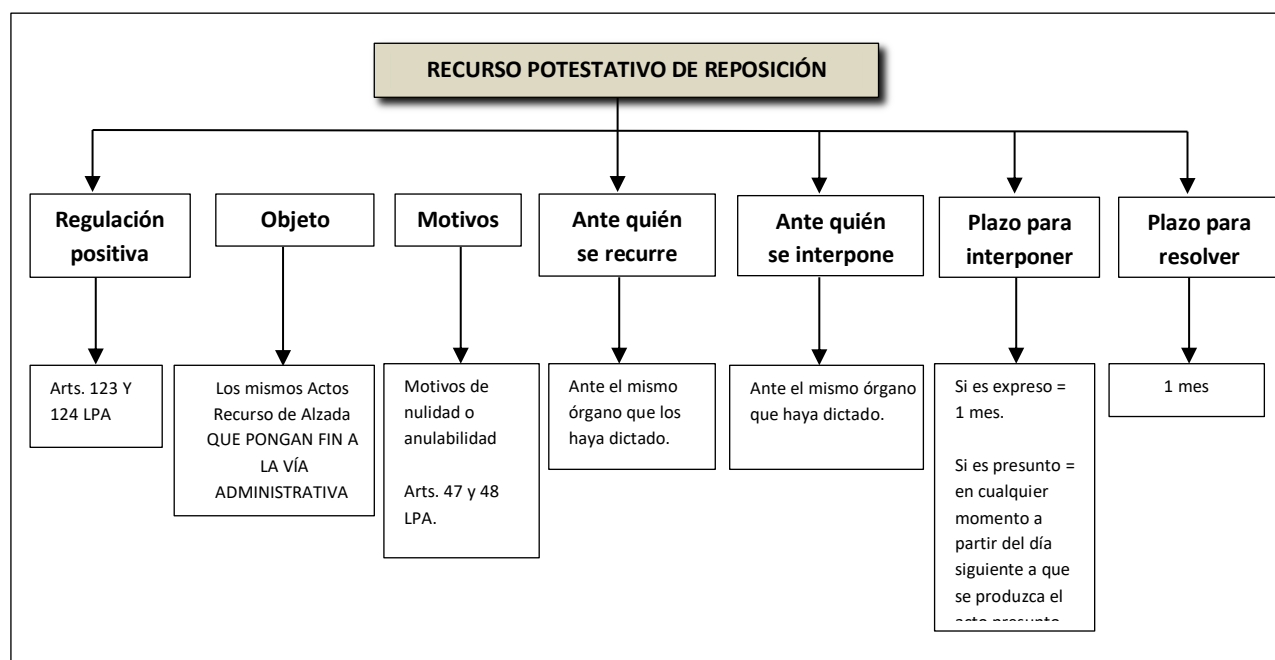
Los actos administrativos que **pongan fin a la vía administrativa** podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto (art. 123).

C) Plazos

Los plazos de interposición y resolución del recurso de reposición aparecen regulados en el art. 124, que establece:

1. “El plazo para la **interposición** del recurso de reposición será de **un mes**, si el acto fuera **expreso**. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.”
2. El plazo máximo para dictar y notificar la **resolución** del recurso será de **un mes**.
3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.”



2.6.3. Recurso extraordinario de revisión

A) Concepto, naturaleza, justificación y regulación legal

El recurso de revisión es de carácter extraordinario o excepcional, de manera que sólo puede ser interpuesto por las causas especiales que se señalan en el art. 125 LPA o en leyes especiales.

Se ha dicho que este recurso constituye, más que un recurso propiamente dicho, un remedio excepcional frente a ciertos actos que han ganado firmeza, pero de cuya legalidad se duda en base a datos o acaecimientos sobrevenidos con posterioridad al momento en que fueron dictados. En definitiva, estos recursos afectan a la llamada autoridad de la cosa juzgada formal.

A su regulación destina la Ley dos artículos, el 125 y el 126 (Sección Cuarta del Capítulo II del Título V), que estudiaremos a continuación sistemáticamente.

B) Casos en que procede

Según el art. 125:

1. “Contra los **actos firmes** en vía administrativa, podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
 - 1º. Que al dictarlos se hubiera incurrido en **error de hecho**, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
 - 2º. Que aparezcan **documentos de valor esencial** para la resolución el asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
 - 3º. Que en la resolución hayan influido esencialmente **documentos o testimonios** declarados **falsos** por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
 - 4º. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de **prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible** y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme”.

C) Plazo de interposición

Según el art. 125 de la Ley:

2. “El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la **causa primera**, dentro de los **cuatro años** siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los **demás casos** el plazo será de **tres meses**, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme”.

El art. 125.3 establece:

3. “Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los arts. 106 y 109.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan”.

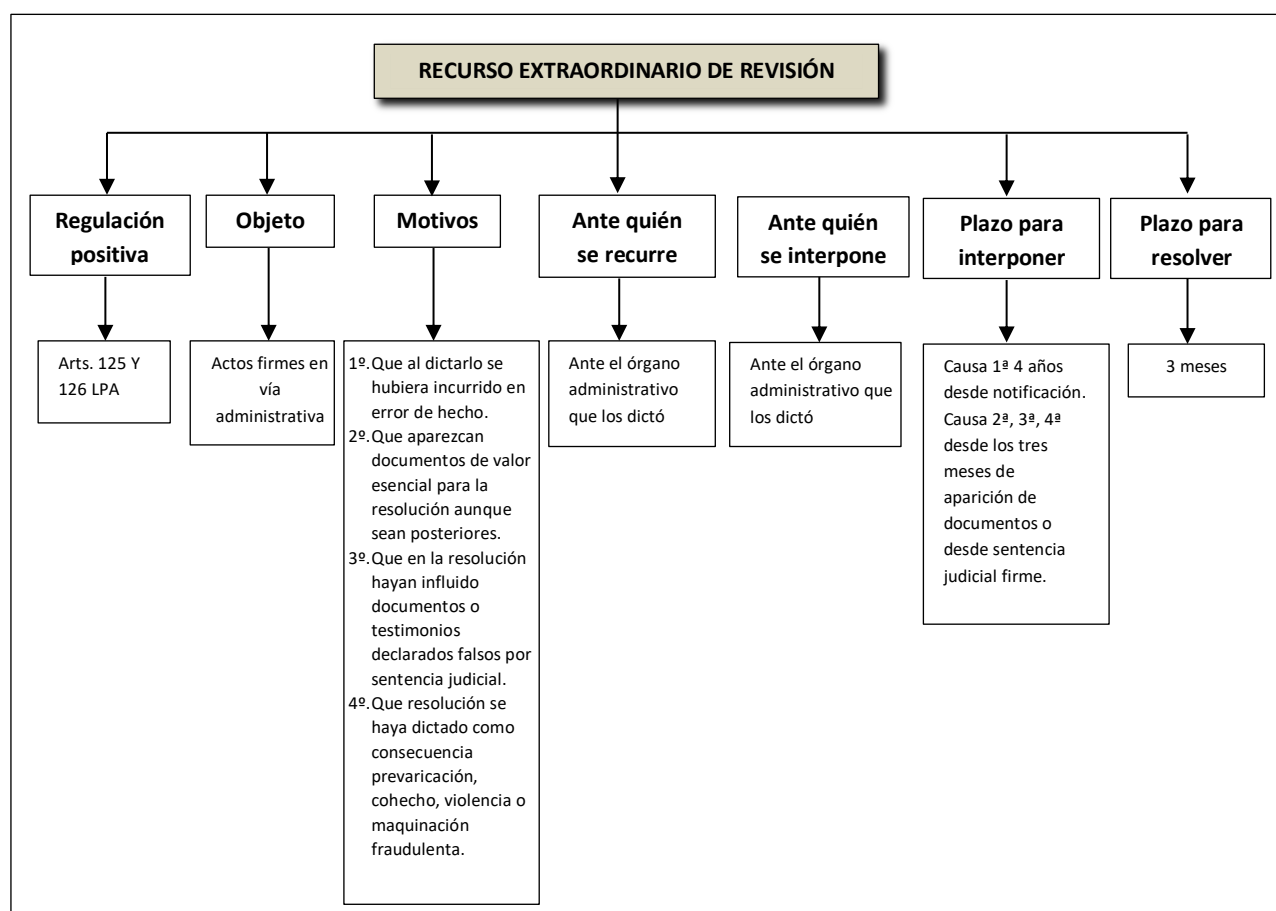
D) Órganos competentes

Según el art. 125.1 LPA, será competente para conocer del recurso extraordinario de revisión el órgano administrativo que haya dictado el acto objeto de recurso.

E) Resolución

De acuerdo con el art. 126:

1. “El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado primero del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.
2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.
3. Transcurrido el plazo de **tres meses** desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa”.



RECURSOS ADMINISTRATIVOS

	Objeto	Interposición	Resolución
ALZADA	<ul style="list-style-type: none"> • Resoluciones. • Actos de trámite que: <ul style="list-style-type: none"> – Decidan el fondo del asunto. – Impidan continuar el procedimiento. • Produzcan indefensión o perjuicio irreparable. • Que no pongan fin a la vía administrativa. • Que, supuestamente, incurran en cualquier motivo de nulidad o de anulabilidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ante el superior jerárquico o ante el propio órgano que dictó el acto, el cual lo remitirá a aquél en 10 días. • Plazo: <ul style="list-style-type: none"> • 1 mes, si el acto recurrido fuese expreso. • En cualquier momento, si fuese presunto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Competencia: órgano superior del que dictó el acto. • Plazo: 3 meses. • Contra tal resolución procederá recurso contencioso-administrativo y, en su caso, el extraordinario de revisión.
REPOSICIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Actos que pongan fin a la vía administrativa. • En lo demás se aplican las mismas reglas que en alzada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ante el propio órgano. • Potestativa: los actos que agotan vía administrativa pueden ser directamente impugnados en vía contenciosa. • Plazo: igual que alzada 	<ul style="list-style-type: none"> • Competencia: el mismo órgano que dictó el acto. • Plazo: 1 mes. • Contra la resolución no procederá nuevo recurso de reposición, pero sí los arriba mencionados.
REVISIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Actos firmes. • Motivos: <ol style="list-style-type: none"> 1º. Error de hecho. 2º. Aparición de documentos de valor esencial para la resolución. 3º. Documentos o testimonios declarados falsos por sentencia firme. 4º. Prevaricación, cohecho, violencia, etc., declarados por sentencia firme. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ante el propio órgano. • Plazo: <ul style="list-style-type: none"> • 4 años siguientes a la fecha de la notificación, en el 1º supuesto. • 3 meses desde el conocimiento de los documentos o desde sentencia firme, en los demás casos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Competencia: el mismo órgano que dictó el acto. • Plazo: 3 meses. • Procederá recurso contencioso-administrativo.